

PRESENTACIÓN

El veinticinco aniversario de la transición democrática española ayudó a recordar un factor unánimemente reconocido desde sus más diversas interpretaciones: el cambio político experimentado, de manera aparentemente súbita y cuasimilagrosa, por la sociedad española fue en realidad fruto de un previo cambio cultural lentamente madurado.

Si la sociedad cambia movida predominantemente por factores culturales, éstos no dejarán de ser perceptibles también en la transición jurídica generada en paralelo a ese cambio político. El vigésimo aniversario de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional español ofrecía una interesante oportunidad para verificar dicha hipótesis. Las aportaciones de quienes desde ese Tribunal, o desde sus equivalentes europeos, han ido protagonizando esa transición jurídica cobran así una peculiar relevancia.

Si en España el cambio cultural ha podido acabar desembocando, a través de la transición política, en lo que hemos caracterizado —con más de una discrepancia— como una *refundamentación del ordenamiento jurídico*, los cambios culturales y sociales han llevado a Europa a vivir también su peculiar transición.

La elaboración de una Carta en la que los más optimistas ven ya el embrión de una futura Constitución comunitaria está, en cualquier caso, llamada a reforzar la protección de *los derechos humanos en los países de la Unión Europea*. El creciente flujo de inmigración que vienen experimentando servirá, sin duda, de elocuente piedra de toque al respecto.

El papel de los Tribunales Constitucionales ha sido, en efecto, y continuará siendo particularmente destacado en todo este proceso. La necesaria defensa de los derechos de los ciudadanos, cuya primacía marca la cultura de la postguerra y de las transiciones políticas que la han ido asumiendo con decenios de retraso, ha obligado a replantear el juego mutuo de los clásicos Poderes del Estado. Ello invita a reflexionar sobre la articulación práctica de *control de constitucionalidad* y *Poder Judicial*, así como, inevitablemente, sobre la relación entre la ley y un derecho que la desborda, o sobre la norma jurídica y unos principios que acaban protagonizando la interpretación de su auténtico "sentido".

La tensión entre individualismo y respeto al otro preside el despliegue práctico de los derechos. En pocos aspectos se ha venido poniendo ello más de relieve que en la relación entre *libre desarrollo de la personalidad* y *derecho a la vida*. Dos cuestiones colaterales han ilustrado este panorama: el debate sobre el posible carácter renunciable de tal derecho, entre otros, y el nuevo panorama trazado por los avances de la biotecnología.

El despliegue de la libertad personal, que el derecho está llamado a tutelar, encuentra en él no pocas veces más obstáculo que protección, lo que alimenta una peculiar conexión entre *libertad ideológica* y *objeción de conciencia*. La delimitación del ámbito de lo "religioso" jurídicamente protegido, cuando las comunidades eclesíásticas consolidadas conviven con variopintas sectas, no deja de plantear problemas específicos.

El respeto al otro aparece, por su parte, marcado en la cultura española por una particular sensibilidad hacia la desigualdad, lo que puede explicar el protagonismo de las políticas sociales y el de aquellos partidos políticos que han sido en cada momento capaces de transmitir con credibilidad su preocupación al respecto. Todo ello invita a analizar *nuevas dimensiones de la igualdad* y las cuestiones que suscita la efectiva protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

La importancia creciente de los medios de comunicación en nuestra cultura, que ha modificado también en España radicalmente pautas sociales de conducta, encuentra traducción jurídica en la tensión entre el ámbito de la información, potenciado por el avance imparable de las nuevas tecnologías, y la necesaria protección de la vida privada. Que tal fenómeno trasciende nuestras fronteras queda claro a la hora de considerar *la necesaria ponderación de la libertad de expresión* con otros derechos en juego, tanto en la esfera individual como incluso en el ámbito de la acción empresarial.

El incremento de la telecomunicación plantea aspectos peculiares de este mismo problema, al confrontar *intimidación y nuevas tecnologías*, en un imprevisible juego de posibles novedosas amenazas o de reforzados mecanismos de protección. El acceso a la red no deja, por otra parte, de servir de ocasión para replantear el difícil logro de una actualizada igualdad entre los ciudadanos.

El libre ejercicio de la participación política viene, por último, planteando –de modo particularmente dramático en España, pero no sólo en ella– la necesidad de una reflexión teórica y una toma de postura práctica ante la aleatoria confluencia de *partidos políticos y apología de la violencia*.

Como ya ocurrió en los dos números monográficos correspondientes al año 2000, hemos procurado contar con especialistas españoles y extranjeros, para ofrecer así una nueva fuente de contrastes con la que enriquecer el ya existente en el planteamiento mismo de los problemas propuestos. A todos ellos debemos un particular agradecimiento.

El Director

